

CONTRATERRORISMO Y SEGURIDAD: LA POLÍTICA DEL MIEDO

Emilio Menéndez del Valle

Embajador de España y eurodiputado socialista

Sitúo el tema objeto de esta charla en el marco de la ofensiva ultra(neo)conservadora USA por ocupar el poder político, social y económico a nivel nacional e internacional. Los actuales gobernantes de Washington han conducido a su pueblo hasta la lamentable situación que hoy padece y que, desgraciadamente, a todos nos afecta. En política interior y en política exterior.

Quienes hoy malgobiernan la gran nación han tardado un par de décadas en organizar el desaguado. En política exterior, los Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz e incluso Colin Powell -un gaudiano que oportunamente aparece y desaparece- en el frente ejecutivo. En el intelectual y académico, los Robert Kagan, Richard Perle o William Kristol, escribiendo sobre la débil Europa/Venus y el Washington/Marte. Comenzaron a moverse al amparo de la presidencia Reagan en los años 80. Maduraron su particular saga durante los años de Bush padre, pero la victoria electoral de Clinton hizo que todos se convirtieran en guardianas a la espera de tiempos mejores, que llegaron con el primer mandato de Bush hijo. Con él, la teoría se oficializó el 20-9-2002 en un solemne documento presidencial que lleva por título "La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América".

Se trata, ni más ni menos, de un plan para dominar el mundo, independientemente de que en éste haya amigos o enemigos. Washington debe preservar su preponderante superioridad militar (con el gasto consiguiente para mantener en óptima salud económica a la industria armamentista) e impedir el surgimiento de nuevos rivales (ahora que ya no hay URSS) que puedan competir con él. Sus prescripciones no son que los EEUU tiene que ser más poderosos, ni siquiera los más poderosos. Tienen que ser absolutamente poderosos. De ahí la importancia de actuar unilateralmente cuando sea necesario. Es una doctrina concebida como derecho absoluto, que otra saga lamentable, la del señor Bin Laden y su actuación especial el 11 de septiembre de 2001, ha hecho que sea difícilmente impugnable, al menos hasta ahora.

En el frente interno, y de manera simultánea, apoyados desde la administración, grupos ultraconservadores y organizaciones cristianas fundamentalistas imprimen ritmo al conservadurismo social.

Económicamente, el gran capital depredador y agresor del medio ambiente avanza, igualmente apoyado desde la administración, al tiempo que Bush, especialmente en su segundo mandato, lleva a cabo una serie de nombramientos de personajes retrógrados, notablemente en el Tribunal Supremo, en el ministerio de Justicia (Gonzales) y en organismos internacionales (BM, Wolfowitz, ONU, Bolton). En el frente jurídico, un grupo de abogados ultraconservadores, protegidos por el vicepresidente Cheney -"Dick Shooter Cheney"-, (John Yoo, David Addington et alia) a raíz del 11-S "secuestran" la política judicial y constitucional. Apoyan la extensión sin apenas cortapisas de los poderes del presidente frente al Congreso y se proponen convertir sus ideas en normas vinculantes.

Si constitucionalmente pudiera volver a presentarse a las elecciones (lo que afortunadamente no es el caso), muy probablemente Bush las perdería, entre otros, por los siguientes temas:

- el fracaso de su estrategia iraquí
- las escuchas ilegales (espionaje)
- las torturas (Abu Ghraib, Guantánamo), no producto de sádicos individuales y aislados, sino de las órdenes de la cadena de mando.

Los dos últimos, espionaje y torturas, están ligados a lo que la administración Bush denomina "war on terror". Uno y otras (aunque, por supuesto, especialmente las torturas) atentan contra las libertades políticas y la dignidad humana. Son un escándalo político, de sistema y de civilización, pero también un escándalo constitucional pues torturas y espionaje se han convertido, además, en muestra obvia de extralimitación constitucional, de autoextensión de los poderes presidenciales en detrimento de los del Congreso, cuya facultad de fiscalización la Casa Blanca quiere evitar.

Sobre la invasión de Iraq se ha dicho ya prácticamente todo: no armas de destrucción masiva, no Al Qaeda (entonces, ahora sí). En fin mintieron como bellacos. No obstante, hay que destacar que han seguido mintiendo en asuntos de reciente aparición, como en el caso de Paul Pillar, el funcionario de la CIA, que en su día avisó de lo que se vendría encima tras la invasión de Iraq, dibujando el escenario caótico que hoy existe y que ha declarado que Bush y Cheney solo atendían a los informes que detallaban los resultados a que ellos aspiraban, rechazando cualquier otro.

Analicemos ahora los atentados contra las libertades civiles y la dignidad humana que el espionaje ilegal y las torturas suponen.

Las escuchas ilegales

Desde el 11-S, miles de ciudadanos norteamericanos están siendo ilegalmente espiados en sus comunicaciones vía e-mail o telefónicas. El espía es la llamada Agencia Nacional de Seguridad (ANS), adscrita al ministerio de Defensa. El descubridor del espionaje es el NYT, al que, agárrense, Bush denigra y acusa de actitud vergonzosa por haberlo desvelado. A pesar de que el diario -agárrense de nuevo- conoció los hechos algo antes de las sui generis elecciones de 2004, donde el Tribunal Supremo otorgó la victoria al actual presidente aunque su contrincante demócrata obtuvo más votos populares, y decidió entonces no publicarlos para no influir en las elecciones.

Bush sostiene que, en nombre de la seguridad nacional, tiene el poder de decidir cuando y donde espiar a los norteamericanos y el ministerio de Justicia que el programa de escuchas de la ANS está amparado por la reconocida autoridad constitucional del presidente en su calidad de comandante en jefe ("¡Llegó el comandante y mandó a parar!" Y luego dicen de Fidel).

Hay arrogancia de poder en el momento del ejercicio del mismo y arrogancia de poder a pesar de haberlo perdido. Nixon es un ejemplo de lo segundo. Tres años después de haber perdido la presidencia a causa de las escuchas ilegales que autorizó en el cuartel general demócrata (hotel Watergate) fue preguntado sobre las mismas. Contestación: "Cuando el presidente lo hace no es ilegal".

Bush recorre parecido camino. Tal vez también en lo del impeachment. Pero, de seguro ya, en lo de la arrogancia. En noviembre del año pasado y a propósito de las torturas espetó: "Todas las actividades que llevamos a cabo son legales. Nosotros no torturamos". Luego les contaré. En cualquier caso, estoy convencido de que cuando Bush deje la presidencia o le echen como a Nixon, sostendrá algo similar cuando le entrevisten tres años después.

Ante la injusticia y el abuso de poder, como toda sociedad democrática, la norteamericana necesita una sacudida de vez en cuando. La tuvo en los años post-Nixon. El Senado constituyó en 1976 una comisión, presidida por Frank Church, para investigar los excesos de Nixon. Y descubrió otros muchos, como los de la CIA que, entre 1953 y 1973 abrió y fotografió 250.000 cartas y creó un listado de millón y medio de nombres (sin duda, incluido el mío). La denominada "Operación Caos" fue una movida de la CIA para vigilar a 7000 opositores a la guerra de Vietnam y otros "subversivos".

El informe final de la Comisión Church contenía este significativo párrafo: "Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos -a veces animadas por la opinión pública y a menudo en respuesta a la presión ejercida por funcionarios de la administración o el Congreso- hicieron con frecuencia caso omiso de la ley al llevar a cabo una vigilancia masiva y agresivas operaciones de contra-inteligencia contra ciudadanos norteamericanos".

Muchos americanos no han olvidado el Watergate ni esas masivas operaciones de espionaje que menciona la Comisión Church. Hoy en día llueve sobre mojado. Existe además una cierta tradición (en gran medida heredada de Europa) que hace que muchos líderes y ciudadanos, incluidos conservadores, consideren que la ley es sagrada y condenables quienes la violan. Es el caso de Alberto Mora, republicano leal y director hasta hace unas semanas del Departamento jurídico de la Marina de los EEUU. Mora, al igual que otros conservadores, pero demócratas, a los que me referiré después se ha opuesto a la violación de la ley, arrogancia y prepotencia de Bush, Cheney y sus gentes. Mora ha sido el principal denunciante, desde dentro del sistema, del tinglado torturador montado con el consentimiento de Donald Rumsfeld (V. The New Yorker, 27-2-06). Mora, cuyo padre es cubano y su madre húngara, dice: "No existe húngaro tras el comunismo o cubano después de Castro, que no sea consciente de que los derechos humanos son incompatibles con la crueldad. El debate aquí y ahora no es solo cómo proteger al país. Es cómo proteger nuestros valores".

De ahí que la Agencia Nacional de Seguridad, Rumsfeld, Cheney y Bush lo tengan tan difícil. Porque, a pesar de todo, existen esos valores y gente dispuesta a batirse por ellos cuando son conculcados. Por eso Michael Hayden, que es en la actualidad director adjunto de la inteligencia nacional y que antes lo fue de la propia ANS acaba de decir: "La Agencia Nacional de Seguridad tiene un problema existencial: para poder proteger las vidas y libertades americanas, tiene que ser dos cosas: poderosa en sus capacidades y secreta en sus métodos. Y vivimos en una cultura política que desconfía, sobre todo, de dos cosas: el poder y el secreto" (Financial Times, 6-2-2006).

Además del impacto social, moral y político que produjeron las conclusiones del Informe Church, hubo una muy importante repercusión jurídica: la promulgación en 1978 de la ley de vigilancia de la inteligencia extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA en sus iniciales inglesas), que convirtió en delito las actividades de espionaje que se llevaran a cabo contra ciudadanos norteamericanos sin una orden judicial emitida por un tribunal específico creado en función de la FISA.

El conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo que existe hoy a propósito del espionaje ilegal consiste en que la Casa Blanca sostiene que actúa legalmente porque la FISA ha sido sobrepasada por la especial autorización para el uso de la fuerza militar (AUMF) que el Congreso otorgó al ejecutivo a raíz del 11-S. La AUMF posibilitó que el presidente usara "toda la fuerza necesaria y apropiada" para prevenir "cualquier acto futuro de terrorismo internacional contra los EEUU".

La administración Bush, en concreto el fiscal general, Albert Gonzales, argumenta que la FISA es demasiado lenta y farragosa para hacer frente a Al Qaeda. Sin embargo, la administración nunca se dirigió al Congreso para que éste la aligerara e hiciera más expeditiva. Reiteradamente, la Comisión Jurídica del Senado y otras instancias han ofrecido al presidente facilitar la tarea y reformar rápidamente la FISA. Sin embargo, como ha escrito The Washington Post National Weekly (13/19 febrero 2006), "la obstinación de la administración al rechazar tales invitaciones es imposible de entender, a no ser que Bush y Cheney estén sencillamente intentando establecer un precedente que conduzca a la conclusión de que pueden llevar adelante la guerra contra el terrorismo sin contar con el Congreso".

En definitiva, Bush pretende convencer de que se puede confiar en él para proteger a los ciudadanos norteamericanos y, de paso, convencer también de que los demócratas no pueden hacerlo. El argumento no es de mucho peso no solo si tenemos en cuenta lo que escribe The New York Times (13-2-2006): "No se nos ocurre presidente alguno que se haya dirigido más veces que George W. Bush al pueblo americano para pedirles que se olviden de la democracia, el sistema judicial y el equilibrio de poderes para sencillamente confiar en él. Tampoco se nos ocurre ningún presidente que merezca menos esa confianza que solicita". Pero tampoco lo es porque hoy en día hay ya varios senadores y otras figuras republicanas alineadas con los demócratas para detener la deriva autoritaria del actual presidente.

Por cierto, hablando de cheques en blanco y de otorgamiento de confianza, es muy significativo el diálogo en una sesión de control del Senado a principios de febrero entre el senador

demócrata por Oregón, Ron Wyden y John Negroponte, ex-embajador USA de triste memoria en Centroamérica y hoy director de la inteligencia nacional. Ante el comentario de éste de que los programas de la ANS eran llevados a cabo con la adecuada supervisión, el senador le espetó: "Señor director, no me sirve esa respuesta. Equivale a decir: <Confíe en nosotros. El Congreso y la opinión pública tienen que confiar en nosotros>. Y Ronald Reagan lo dijo muy apropiadamente: "<Confíen, pero verifiquen>" (Financial Times, 6-2-2006).

Así entendido, así manipulado, el "principio de confianza" puede resultar una tomadura de pelo. Y ya he dicho antes que, llegados a este punto, el sentido crítico, la defensa de la democracia, de la dignidad y de las libertades civiles no son solo, afortunadamente, patrimonio de los demócratas, también de los republicanos. Así, Bruce Fein, un consultor político conservador que trabajó doce años en el ministerio de Justicia con Nixon y Reagan, lo tiene muy claro: "la negativa de Bush a adecuarse a la ley es un asalto directo a la separación de poderes". Dice que a los presidentes se les debe dar un amplio margen para que protejan la seguridad nacional tal como ellos la entiendan. Pero "si el presidente se muestra reacio a especificar algo que roza los límites de lo prohibido contra la opinión del Congreso, se está estableciendo un principio de <confíen a mí> como medida de nuestras libertades civiles. Llegados a ese punto hay que empezar a hablar del impeachment". (Financial Times, 6-2-06). Contundente. Y Fein no es el único que estos días suscita la posibilidad del impeachment.

En resumidas cuentas, el descaro arbitrario con el que el ejecutivo mantiene que la AUMF ha arrinconado a la FISA en lo que se refiere al establecimiento de pinchazos informáticos o telefónicos, por lo que la administración no requiere orden judicial alguna, es contestada por la mayoría de analistas y constitucionalistas, demócratas y republicanos. Así, en enero de 2006, 14 prestigiosos constitucionalistas, la mayoría de los cuales ha servido en distintas administraciones, se dirigieron al Congreso expresando que la FISA de 1978 es absolutamente clara cuando prohíbe el espionaje sin mandato judicial y que no ha sido suspendida o sobrepasada por ninguna otra ley. Añadían que si la administración estimaba que dicha ley era insuficiente, debería haber pedido al Congreso que la cambiara, en lugar de ignorarla. En modo alguno puede el presidente violar las leyes a puerta cerrada porque estime que son obsoletas o impracticables. Además, el ilegal programa de espionaje interno de Bush puede sentar un precedente que en tiempo de guerra permita a los presidentes quebrantar la ley en nombre de la seguridad nacional, sentenciaban.

Una variante significativa del cerco legal y judicial que sufre Bush en esta materia es que, entre los más activos y sensatos están varios senadores republicanos, alguno con currículo de permanente fidelidad al presidente. Es el caso del senador por Kansas Sam Brownback. Miembro de la Comisión jurídica, ferviente militante anti-aborto, es famoso en la cámara por haber apoyado siempre sin la menor discrepancia o fisura todos los nombramientos judiciales propuestos por el presidente. Y es él precisamente quien, en unión de otros tres senadores republicanos y todos los demócratas de la Comisión jurídica, está exigiendo que Bush retorne al Congreso y que pida autorización para realizar las escuchas, pero bajo supervisión judicial. Y recientemente, interrogando al fiscal general, Gonzales, lo manifestó oportunamente: "Señor fiscal, me temo, dijo, que vamos a estar durante décadas inmersos en esta guerra contra el terrorismo y para que podamos mantener el apoyo de la opinión pública es importante que haya un par de ojos más vigilando a los que vigilan" (The Washington Post National Weekly 13/19 febrero 2006).

Finalmente, para cerrar este apartado, y la serie de disgustos que Bush está recibiendo de sus propios correligionarios, vean lo que el senador republicano Lindsey Graham (que antes de serlo era oficial jurídico del Ejército) le acaba de decir al presidente: "Cuando voté a favor de autorizar el uso de la fuerza (AUMF) contra quienes perpetraron el 11-S, jamás contemplé la posibilidad de que iba a otorgar a este presidente o a cualquier otro carta blanca para eludir la FISA" (The Washington Post National Weekly, idem).

Las torturas

El 26 de septiembre de 2002 Maher Arar, un ingeniero canadiense de origen sirio, hizo escala en el aeropuerto de Nueva York de regreso de unas vacaciones en Túnez. Fue detenido porque había sido fotografiado tomando un café con un supuesto terrorista. Retenido en los

EEUU sin cargo alguno durante dos semanas, fue enviado en un avión sin distintivos a Siria (ese país eje del mal, según Bush). Allí fue torturado durante 12 meses. Tras una intervención de Canadá, fue liberado en octubre de 2003. El embajador sirio en Washington declaró que Damasco había sido incapaz de encontrar vínculo alguno entre Arar y el terrorismo. Es un caso típico de deslocalización de la tortura (V. mi artículo de ese título en El País, 19-06-2005).

Invadido Iraq, en octubre de 2003 fue capturado el general Abed Hamed Mowhoush, jefe de la fuerza área iraquí. Murió el 26 de noviembre en un centro de detención desconocido debido a "causas naturales". El Denver Post forzó al Pentágono a admitir que la autopsia revelaba que el general había muerto "a causa de asfixia producida por compresión del pecho".

En Guantánamo, en 2003, Mohamed al -Qahtani, un saudí apresado en Afganistán, fue sometido a 160 días de aislamiento, sujeto permanente a potente luz artificial. Interrogado 50 días, durante 20 horas diarias ininterrumpidas. Desnudado, acosado por guardianes femeninas, forzado a llevar ropa interior femenina, azuzado por perros. Se le impedía dormir y se le sometía continuamente a sesiones de música pop a volumen desorbitado. Tras confesar todo lo que le exigieron sus torturadores Al-Qahtani pedía desconsoladamente que le permitieran suicidarse (The New Yorker, 27-2-2006).

Debe quedar claro que el uso de la tortura en la administración Bush ha sido sistemático y ordenado desde el ministerio de Defensa, que dirige el ministro de la Guerra, Rumsfeld. Human Rights Watch sostiene que la administración ha elegido deliberadamente la opción política de abusar de los detenidos. El cinismo de Rumsfeld es imperdonable. El 12-1-2006 no tiene empacho en afirmar: "Lo que sucedió en Guantánamo es hoy conocido y las investigaciones demostraron que nada sugería que existiera una política en mi departamento que no fuera la de dar un trato humano" (The New Yorker, idem). Por su parte, el fiscal general afirma que "los detenidos deben ser tratados humanamente", pero matiza: "y siempre que las necesidades militares lo permitan, de acuerdo con las convenciones de Ginebra". Fue, no obstante, el propio Gonzales quien aconsejó a Bush que, en la guerra contra Al Qaeda, dichas convenciones debían ser consideradas obsoletas.

Pero casi todos en la administración Bush continúan mintiendo. En junio de 2003, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, exige de la secretaria de Estado Rice una rotunda declaración sobre la política gubernamental para con los prisioneros. La falsedad de Bush a que he aludido: "todas las actividades que llevamos a cabo son legales. Nosotros no torturamos", es repetida por Condoleezza: "No se tortura", afirma. Queda en evidencia cuando el 28-4-2004 se publican las vergonzosas, espeluznantes fotos de Abu Ghraib. Otro cinico, Porter Goss, el director de la CIA amigo de Bush, mantiene que ellos no se sirven de la tortura, solo de técnicas imaginativas.

En el caso de las torturas, al igual que en el de las escuchas ilegales, la administración ha construido un tinglado, supuestamente jurídico-constitucional, para -apoyándose en la AUMF- justificar la extensión del poder ejecutivo. La articulación del nuevo paradigma lo inició ya en 2002 el hoy fiscal Gonzales (entonces asesor en la Casa Blanca), argumentando que en la nueva guerra no había enemigos convencionales y por tanto no se debían aplicar las estrictas limitaciones de Ginebra. De ahí que, en función de una supuesta "doctrina de la necesidad", el presidente podía desplazar las leyes nacionales e internacionales que prohíben la tortura. En función de la misma, los teóricos ultraconservadores a quienes aludía al comienzo de esta charla arguyen que el jefe del ejecutivo puede ordenar la tortura si se trata de una necesidad militar. El desprecio al parlamento es parejo pues estiman que el Congreso "no puede regular la facultad del presidente para detener e interrogar a los combatientes enemigos, como tampoco puede regular su facultad de dirigir los movimientos de tropas en el campo de batalla" (The New Yorker, idem). Y no hay disimulo. Cuando Alberto Mora, el gran luchador contra las torturas desde dentro del sistema, pregunta a John Yoo, consejero en el ministerio de Justicia: "¿Está usted afirmando que el presidente dispone de autoridad para ordenar la tortura", Yoo, llanamente, contesta: "Sí".

Cuando -ante el cúmulo de barbaridades que he descrito y la ofensiva bi-partidaria para hacerle frente- Bush se ve obligado a principios de este año a aceptar la firma de un protocolo legal contra la tortura que le presenta el senador republicano de Arizona John McCain, lo hace de

forma sui generis. Convierte en ley el texto que le obliga a prohibir los tratos "cruels, inhumanos o degradantes" a los prisioneros (que es justamente lo que prescriben las convenciones de Ginebra). Sin embargo, en el mismo acto de la firma, devalúa lo acordado con McCain pues declara que, a propósito de lo firmado, "actuará de manera congruente con la autoridad constitucional del presidente".

Asombrosamente, hay quienes argumentan que la tortura de sospechosos de terrorismo ayuda a salvar vidas y que legitimarla y someterla a control puede reducir el peligro que la misma supone para la vida de los torturados. Sin embargo, la historia evidencia que legitimar la tortura la convierte en normal y la hace más frecuente, no menos.

Los EEUU y sus aliados, en especial Gran Bretaña, (ahora Tony Blair dice en plan iluminado que Dios y la historia juzgarán su decisión de invadir Irak) han dado prioridad a la obtención de información (entre gemido y gemido a menudo inventada por el torturado) sobre las restricciones morales y jurídicas -y por qué no políticas- que deben aplicarse a la violencia.

En tiempos en que el mundo está amenazado por quienes no desean aceptar la democracia ni respetar los derechos humanos y que consideran que el asesinato de civiles está justificado y cuando Occidente dice querer extender la democracia a donde no existe, utilizar los mismos métodos de aquellos a quienes, simultáneamente, se pretende combatir y predicar, equivale a un suicidio civilizacional. ¿Estamos locos?